



RESUMEN Y PROSPECTIVA

- **Cambio de titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero obedece a una crisis de violencia, sospechas de colusión con la Nueva Familia Michoacana (NFM) y la necesidad de mejorar la imagen del gobierno frente al proceso electoral** (p. 4). Después de haberse anunciado desde diciembre de 2023 que el secretario de Seguridad Pública del estado, el capitán de la Marina Evelio Méndez Gómez había presentado su renuncia, el pasado 24 de enero finalmente se llevó a cabo el anunciado relevo. En su lugar fue designado el general Brigadier de la SEDENA, Rolando Solano Rivera, quien es guerrerense originario de la ciudad de Tlapa de Comonfort en la región Montaña. Este cambio se presenta en medio de una prolongada crisis de violencia en la región norte, centro y Costa Grande de Guerrero, incluido el puerto de Acapulco, donde el problema de las extorsiones en el transporte público ha prevalecido a pesar de la presencia de más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional. Este cambio que se realizó con toda institucionalidad, y con la presencia de los secretarios de la SEDENA y de la SSPC federal, refleja el desgaste de dos años y tres meses de servicio del secretario saliente que acumuló múltiples señalamientos de que la estructura de la secretaría colaboraba con el grupo de la NFM. Estos cambios se presentan de cara al proceso electoral, para mejorar la imagen del gobierno estatal.
- **Consolidación de La Línea (Nuevo Cártel de Juárez) y conflicto con Cártel de Sinaloa dispara cifra de asesinatos en Ciudad Juárez** (p. 7). Durante el último fin de semana de enero y la primera semana de febrero 2024 se registró en Juárez un repunte de homicidios dolosos vinculados con las disputas entre diversas organizaciones criminales. En diferentes puntos del municipio ocurrieron al menos una veintena de homicidios. Las autoridades de seguridad del municipio y del estado coincidieron en que esta inusitada ola de violencia tiene como resorte el conflicto entre diversos grupos de La Línea y del Cártel de Sinaloa que luchan por el control de los mercados de trasiego de drogas (especialmente metanfetaminas) y del tráfico de migrantes a Estados Unidos. La Línea continuará consolidando su presencia territorial en los siguientes meses en detrimento de Los Guzmán del Cártel de Sinaloa, amenazando con repetir el escenario de inseguridad del período 2008-2011.

- **Obstaculiza la alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, los operativos federales en contra del CJNG** (p. 9). El 28 de enero, la alcaldesa del municipio y algunos de sus primeros funcionarios encararon a elementos del Ejército para impedir que se llevaran detenido a “El Guache”, uno de los jefes operativos del CJNG (ese día fue capturado). Aunque el municipio no experimenta una situación grave de violencia (en todo 2023 se identifica sólo a una víctima letal del crimen organizado), existen indicios de que éste es un importante territorio para el CJNG: [1] Es relevante por su posición cercana a la carretera que comunica el puerto de Lázaro Cárdenas con Colima y Jalisco. [2] Hay un extenso grupo de personas y empresas que son víctimas de extorsión (en particular, empresas dedicadas a la minería y agricultura). Por último, [3] el CJNG logró infiltrarse y cooptar importantes posiciones en el Ayuntamiento de Coalcomán, el cual paga una cuota por extorsión del cartel, el que también mantiene el control de la policía municipal y de los apoyos sociales que recibe el municipio.
- **Autoridades federales y estatales destacan disminución del robo a autotransporte, pero carreteras de Jalisco se mantienen en alerta ante hechos delictivos** (p. 11). El 7 de enero se registró una balacera en la carretera libre a Zapotlanejo por el reporte de dos pipas que presuntamente trasladaban huachicol. Aunque las autoridades no emitieron un reporte oficial y medios de comunicación apuntaron que no hubo víctimas, el incidente alarmó a pobladores y usuarios carreteros debido a los narcobloqueos registrados en noviembre y diciembre. Si bien, cifras oficiales de 2023 colocaron a Jalisco entre las 10 entidades con más robos a autotransporte, es evidente que los datos reflejan una tendencia a la baja. Sin embargo, existen vías de alta incidencia delictiva que representan un peligro para el tránsito de unidades de carga, así como para vehículos particulares, por lo que en el corto plazo se espera que hechos de violencia continúen, principalmente en las carreteras que circundan el área metropolitana de Guadalajara, como las 15, 15D, 80 y 80D, especialmente en la zona del Macrolibramiento, en los puntos cercanos a municipios de mayor nivel delictivo como Teocaltiche y Lagos de Moreno, en los entronques a los estados vecinos de Guanajuato y Colima, así como con los que conectan con el norte del país, como Aguascalientes y San Luis Potosí.
- **Ataques contra policías en Guanajuato; respuesta del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) para exhibir fuerza** (p. 13). Los ataques y emboscadas dirigidos contra fuerzas de seguridad en Guanajuato se han intensificado en el último mes, especialmente contra los policías municipales y los policías estatales en el municipio de Celaya. En menos de 10 días se han registrado al menos ocho diferentes agresiones contra las fuerzas de seguridad. Aunque ninguna organización se adjudicó los ataques, es probable que se trate del CSRL, que ha intentado mostrar fortaleza frente a la detención de líderes importantes (primero el principal jefe, José Antonio Yepes Ortiz (a) “El Marro” en 2020 y luego de su hijo, en enero de este año). Aunque estos eventos son una afrenta a las fuerzas de seguridad y un esfuerzo por provocar miedo y exhibir fuerza, por el momento no parecen implicar un cambio en las tendencias; aunque es importante destacar que,

de continuar estos incidentes sin una respuesta contundente de las autoridades, la situación podría agravarse.

- **Hallazgo de 15 personas en Tuxpan anuncia la persistencia de las masacres en la región norte de Veracruz** (p. 16). La noche del domingo 28 de enero, autoridades locales encontraron restos de 15 personas abandonados en una camioneta en la ciudad de Tuxpan. En el lugar, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación desplegaron una narcomanta en la que amenazaron a un grupo rival, Grupo Sombra, para que finalicen su presencia en Poza Rica. Pese a que el gobernador Cuitláhuac García informó que se trató de un arreglo de cuentas entre criminales, se trata de una masacre de migrantes guatemaltecos que fueron interceptados por el CJNG. El jueves 1 de febrero, el Grupo Sombra respondió con el despliegue de cuatro narcomantas en Poza Rica donde amenazaron particularmente a un jefe de plaza del CJNG conocido como el Coco, vinculado con funcionarios del gobierno local. Advertimos que este tipo de masacres, de las cuales reportamos ocho en 2023, continuarán en el mediano plazo a manera de ajustes de cuentas entre ambas facciones criminales por control territorial. Esta violencia afectará a transportistas que emplean las carreteras de la zona norte para arribar a Tamaulipas, estado en el que predomina la presencia del Cártel del Noreste.
- **Solo el 11% de la capacidad penitenciaria federal se encuentra ocupada. En ocho entidades se observa una sobrepoblación penitenciaria: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit y Sonora** (p. 18). Lantia Intelligence presenta un análisis de la ocupación instalada en centros de internamiento para las personas privadas de la libertad. Los centros penitenciarios tienen una ocupación del 64%, mientras que los centros de adolescentes están ocupados en un 22%. Sobresale que los centros penitenciarios a cargo de la federación tienen una población internada de 3,035 de una capacidad de 28,520, lo que implica una ocupación de apenas el 11%. Son ocho estados los que han sobrepasado por completo su capacidad instalada: Aguascalientes (188%), Baja California (134%), Coahuila (320%), Chihuahua (123%), Durango (108%), Guanajuato (138%), Nayarit (317%), y Sonora (117%). En 2022 se registraron un total de 2,456 incidentes en los centros penitenciarios, de los cuales uno de cada tres es una riña.



Cambio de titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero obedece a una crisis de violencia, sospechas de colusión con la Nueva Familia Michoacana (NFM) y la necesidad de mejorar la imagen del gobierno frente al proceso electoral

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

El jueves 25 de enero tomó protesta como nuevo secretario de Seguridad, el general Brigadier de la SEDENA, Rolando Solano Rivera, quien es guerrerense originario de la ciudad de Tlapa de Comonfort en la región Montaña, en sustitución de Evelio Méndez Gómez quien es capitán de la Marina Armada de México y se integró como funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública desde el 15 de octubre del 2021, cuando la gobernadora Evelyn Salgado inició su mandato. Es previsible que se realicen cambios en prácticamente toda la estructura administrativa con que operaba la Secretaría de Seguridad Pública, ya que una buena parte de los actuales mandos son personal de la Marina que llegó a Guerrero para hacerse cargo de la institución, y ante el cambio, donde el nuevo mando será un militar, los mandos medios también serán ocupados ahora por elementos de las fuerzas castrenses.

La salida del secretario Evelio Méndez Gómez se presenta en medio de una importante crisis de seguridad por la situación del transporte en Acapulco y Taxco, y por asesinatos de policías en Coyuca de Benítez, enfrentamientos entre Los Tlacos y Los Ardillos en la región centro, y por las muertes ocurridas en playas de Acapulco, a pesar de la importante presencia de la Guardia Nacional después de la destrucción del huracán OTIS. Hay señalamientos de la actuación parcial de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona de Costa Grande a favor de la operación de la NFM. El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, reconoció en su momento que el grupo delictivo de la NFM se estaba expandiendo de la Tierra Caliente hacia la Costa Grande, lo que originaba el incremento de denuncias sobre extorsiones, amenazas y cobro de piso.

Al evento de cambio de titular asistieron la secretaria federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez y el secretario de SEDENA, general Luis Crescencio Sandoval González, así como, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado; el comandante de la Novena Región Militar, Enrique Martínez López y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Víctor Fernández Mondragón. No hay registro de presencia del secretario de SEMAR. En su mensaje la secretaria Rosa Icela señaló que el objetivo es devolverle por completo al estado la paz que su población demanda. Señaló que, en noviembre de 2023, derivado del paso de Otis, la presencia de la GN se reforzó en Acapulco y Coyuca de Benítez, medida que ha propiciado una baja en los delitos que se venían cometiendo. Informó también la secretaria que las autoridades ponen especial atención al delito de cobro de piso, y que preparan una iniciativa de ley para tipificar como grave el delito de extorsión.

- Por su parte, la gobernadora Salgado sostuvo que el cambio de secretario representa la unidad y la coordinación para atender el problema de la violencia. La mandataria agra-

deció la labor del exsecretario quien, dijo, sentó las bases “de una forma distinta de atender el problema de la seguridad”, atendió las causas y se enfocó en la profesionalización de las policías. Se menciona en fuentes abiertas que Méndez Gómez justificó su renuncia por problemas de salud que requieren intervenciones quirúrgicas, y que en próximos días sería presentado como director de Logística de la SEMAR en la Ciudad de México. En la información oficial de la SEDENA estos cambios obedecen a la rotación normal que se lleva a cabo en los mandos regionales de la Secretaría en cada entidad federativa. En Guerrero, recientemente fueron cambiados los comandantes de las zonas militares, la región naval y la guardia nacional.

- El nuevo secretario de Seguridad Pública del estado ingresó al Heroico Colegio Militar como cadete en 1986, y cuenta con múltiples condecoraciones y reconocimientos, acumulando 37 años y 5 meses en el servicio militar. Tiene una maestría en seguridad y defensa nacional que realizó en Colombia, ha sido jefe de la sección de investigación y doctrina militar de la Dirección General y Rectoría de la Universidad y Fuerza Aérea; comandante de la 16ª. Compañía de infantería en San Lucas, BCS.; comandante de los batallones 48, 80, 40 en Cruz Grande (Guerrero), Tlaxcala y San Luis Potosí; jefe de Estado Mayor en la 12ª zona militar en San Luis Potosí y 27ª zona militar en Acapulco. Su último cargo fue subdirector general de cartografía en la SEDENA.

El cambio de titular de seguridad, se presenta en el contexto de varios actos de violencia que han puesto en crisis la actuación de la policía estatal, entre los que destacan los siguientes:

- La presentación de 20 guardias infantiles de la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín Herrera, durante una asamblea realizada el miércoles 24 de enero, la dirigencia de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF), le tomó la protesta a un grupo de 20 menores de entre 12 y 17 años, de los cuales cinco son niñas. La asamblea comunitaria se realizó luego que el viernes 19 de enero, hombres armados privaron de su libertad a Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años, su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52 años, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 32 y 20 años, cuando reunían su ganado en un punto conocido como Zacatepec. Según la versión de los dirigentes de la CRAC-PF, fueron secuestrados por delincuentes que pertenecen a la organización criminal de Los Ardillos, y se encuentran retenidos en la comunidad de Tlanicuulco, en el municipio de Quechultenango. Al municipio han acudido diferentes autoridades estatales para salvaguardar los derechos de los menores, pero las autoridades comunitarias han rechazado la ayuda en tanto no se informe de las personas secuestradas.
- Secuestro de dos policías ministeriales en el municipio de Pilcaya, quienes fueron encontrados muertos el 24 de enero en la localidad de Tlamacazapa, en Taxco. Las víctimas fueron encontradas con una cartulina con un mensaje escrito por “La Federación Gue-

rrerense y sus aliados de Morelos”, quienes acusaron a los elementos policiacos de apoyar a la NFM.

- Viernes 19 de enero, hombres armados ingresaron al bar La Martina en Chilpancingo, y atacaron a un grupo de trabajadores de la Fiscalía estatal, lo que generó un enfrentamiento con el saldo de tres muertos y cinco heridos.
- La mañana del miércoles 31 de enero, cientos de elementos de la Guardia Nacional, iniciaron sus recorridos de vigilancia en las 21 playas del puerto de Acapulco. En los últimos días, y pese a la presencia de diez mil elementos de la Guardia Nacional, se registraron en playas como Dominguillo y el Morro, tres muertos y dos heridos por proyectil de arma de fuego. El tema de la violencia en las playas, provocó que los tres niveles de gobierno reactivaran el operativo de seguridad en la zona federal, con la finalidad de enfrentar la crisis de inseguridad. De hecho, fue publicado en el Diario Oficial la creación del Mando Especial de la Guardia Nacional Acapulco que presumiblemente mantendrá un esquema especial de seguridad pública sobre el puerto. Se estima que en el corto plazo se mantendrán los 10 mil elementos asignados al puerto después del huracán OTIS para salvaguardar el comercio. La violencia en las playas de Acapulco ha comenzado a reactivarse, los grupos empresariales han señalado que las fuerzas federales han descuidado la seguridad, por dedicarse más a labores de apoyo a la población en el reparto de despensas, cuidar inmuebles comerciales y entregar enseres domésticos.
- El viernes 2 de febrero tres trabajadores del CBTIS 178 fueron hallados asesinados, en un camino que conduce a la comunidad de Tres Caminos, en Tlapa de Comonfort. Habían sido privados de su libertad el miércoles cuando regresaban de Chilpancingo a Tlapa después de realizar trámites administrativos. De acuerdo con reportes de la FGE, la zona de Atlixac, cercana al municipio de Chilapa, es un territorio donde opera la organización criminal de Los Ardillos. Apenas, el 24 de enero, el ex alcalde de Atlixac, el perredista Marcelino Ruíz Esteban y su esposa, Guadalupe Guzmán Cano, fueron asesinados a balazos sobre este mismo tramo de carretera federal Chilapa-Tlapa. Ruíz Esteban aspiraba a ser el candidato del PRD a la alcaldía de Atlixac en este 2024, y su esposa era consejera estatal del mismo partido. Tenían señas de impactos de balas. Ruíz Esteban fue alcalde de Atlixac en los periodos de 2015-2018 y 2018-2021.

Los cambios en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, vendrán a renovar la esperanza de una modificación que mejore las condiciones de seguridad. Por la experiencia observada en los últimos dos años, la llegada de personal militar a la titularidad de las policías estatales, no generó mejores condiciones de seguridad, por el contrario, se presentaron severas crisis donde ha quedado en entredicho la neutralidad de las autoridades e incluso su colaboración con grupos criminales ha sido señalada en diferentes operativos por los grupos rivales. Es previsible que coyunturalmente las condiciones de seguridad mejoren, especialmente por las elecciones de junio donde el gobierno del estado ha calcu-

lado que el principal riesgo consiste en la narrativa de su incapacidad para controlar al crimen organizado aún a pesar del apoyo otorgado por el Ejército.

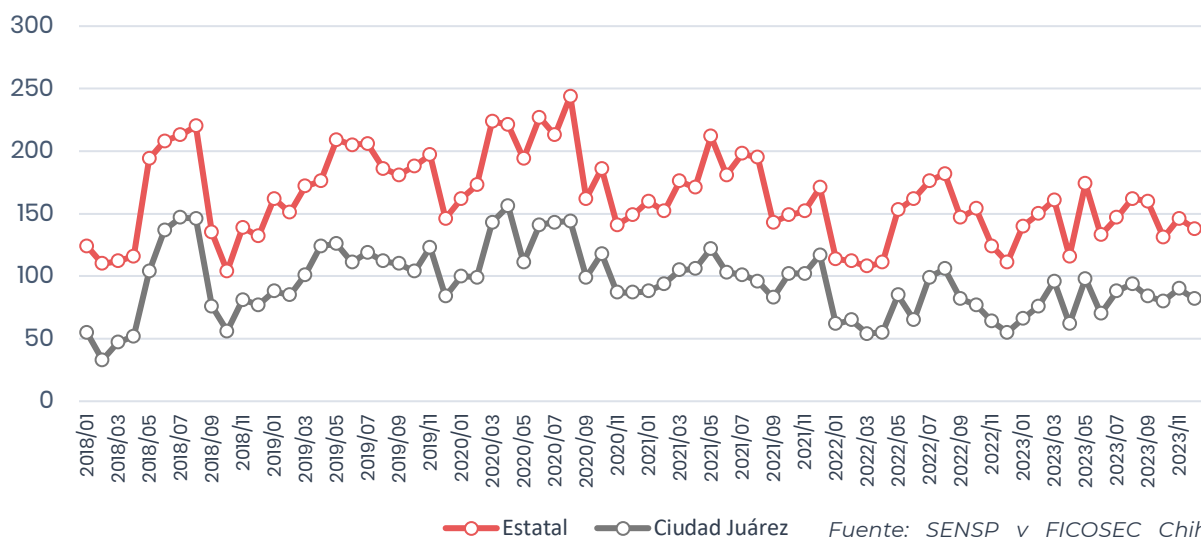


Consolidación de La Línea (Nuevo Cartel de Juárez) y conflicto con Cartel de Sinaloa dispara cifra de asesinatos en Ciudad Juárez

DINÁMICA CRIMINAL

Durante el último fin de semana de enero y la primera semana de febrero 2024 se registraron en Ciudad Juárez, Chihuahua, un repunte de homicidios dolosos vinculados con las disputas entre diversas organizaciones criminales. En diferentes puntos de Juárez ocurrieron durante el fin de semana al menos 22 homicidios. Entre ellos destaca el asesinato de cinco personas, incluido un niño de 11 años, a manos de un comando armado durante la celebración de un funeral; la muerte de tres personas en una vivienda en la colonia Plutarco Elías Calles; el asesinato de un hombre que se encontraba en una gasolinera en la colonia Aztecas; la muerte de un mecánico en la colonia Morelos; y, acaso el hecho más relevante para explicar el contexto de violencia de los últimos días, el hallazgo del cuerpo de José Domingo Carrere Bermúdez (a) “El 010”, supuesto líder de plaza del Cartel de Sinaloa en el municipio de Parral. “El 010” fue encontrado junto a varias mantas con mensajes contra mandos policiacos, así como junto a más de 300 kilogramos de drogas, incluyendo fentanilo y metanfetaminas. Además, el pasado 2 de febrero ocurrió una masacre en la que 4 personas más perdieron la vida en la colonia Horizontes del Sur. A las cifras reportadas sobre los asesinatos en Ciudad Juárez deben también sumarse los múltiples eventos de violencia letal que se han reportado en diferentes municipios de Chihuahua, pero cuya cifra final para enero aún está en proceso de recopilación por la Fiscalía General del estado. Sin embargo, tan sólo en el municipio de Juárez, enero registró un total de 125 asesinatos, lo que le convierte en el mes con el número más elevado de homicidios dolosos desde junio-agosto 2020, cuando Juárez tuvo más de 140 víctimas durante tres meses.

Tendencia mensual. Homicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua
(enero 2018 - diciembre 2023)



Las autoridades de seguridad del municipio y del estado coincidieron en que esta inusitada ola de violencia tiene como fundamento el conflicto de diversos grupos del crimen organizado por el control de los mercados de trasiego de drogas y de tráfico de migrantes a Estados Unidos. Según el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, lo que ha ocurrido en los últimos días es una lucha particularmente intensa por el mercado de las metanfetaminas. De la misma opinión es el fiscal general del estado, Gilberto Loya, y el titular de la policía municipal, César Omar Muñoz Morales, quien, además, agregó que la prioridad del municipio es concentrarse en contener el número de homicidios dolosos y reforzar la vigilancia para prevenir robos y asaltos en las zonas residenciales de Juárez.

Ciudad Juárez ha constituido históricamente uno de los epicentros de violencia en Chihuahua al ser un área muy valiosa para las organizaciones criminales por su vecindad con El Paso, Texas. En conjunto, ambas ciudades forman una dinámica relación binacional y transfronteriza en la que el tráfico ilícito de migrantes constituye un ingreso económico clave para el crimen organizado. El sur de Texas es la ruta más cercana y directa hacia Estados Unidos desde México. Recientemente, factores de expulsión (inseguridad, carencias económicas, cambio climático, corrupción) en países de origen de todo el mundo, pero sobre todo de América Latina, han provocado un crecimiento importante en el número de migrantes que buscan ingresar hacia los Estados Unidos por la frontera chihuahuense. El incremento de demanda de servicios de contrabando se traduce en enormes ganancias para los grupos criminales a costa de los migrantes, pero también de los “coyotes” que administran este negocio (el costo de contrabando para cruzar la frontera puede rondar entre cuatro mil y 10 mil dólares por persona). Apenas el pasado 25 de enero fueron rescatados 15 migrantes en la colonia Hacienda de las Torres, 10 extranjeros latinoamericanos y cinco mexicanos, por la Unidad de Antisecuestros de la FGE. De la misma forma, Juárez es un corredor histórico para el tráfico internacional de drogas, y específicamente para metanfetaminas y fentanilo. Según César Omar Muñoz, cerca del 90% de los homicidios en Juárez están relacionados con la disputa por la venta transnacional de estas sustancias ilícitas.

Desde hace más de 15 años se ha mantenido una rivalidad entre diversas organizaciones criminales por el control de Ciudad Juárez. La disputa que actualmente ocurre en Chihuahua es sostenida por el Cártel de Sinaloa y el Nuevo Cártel de Juárez. Éste último, también conocido como La Línea, se formó a partir de los elementos que sobrevivieron del antiguo brazo armado del primer Cártel de Juárez dirigido por la familia Carrillo Fuentes, y que se enfrentó a (y fue derrotada por) la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Joaquín Guzmán Loera en una cruenta lucha entre 2006 y 2011, cuya letalidad y destrucción aún es recordada por los habitantes de Juárez. Hoy en día, gracias al apoyo de organizaciones como el CJNG, el Nuevo Cártel de Juárez, liderado por algunos descendientes de Amado Carillo (a) “El señor de los cielos”, ha recuperado discretamente recursos, territorios y mercados en Ciudad Juárez. Según fuentes del gobierno federal, La Línea podría tener más de 15 mil individuos operando en diversos estados, lo que la convierte en una organización de alto

riesgo, especialmente con el precedente de la violencia desatada durante las administración del presidente Felipe Calderón.

La Línea tiene una presencia territorial extendida en Chihuahua. Según algunas fuentes abiertas diversas, ésta podría extenderse hasta en 60 de 67 municipios de Chihuahua. En Lantia Intelligence hemos identificado su presencia confirmada en al menos 30 municipios clave repartidos en la zona norte, este, sur y centro del estado: allí se dedica, además de los negocios de trata de migrantes y narcóticos, a la extorsión y cobro de piso, particularmente de la industria minera del zinc y del cobre. Sólo en la zona de la sierra occidental chihuahuense, en municipios como Guadalupe y Calvo, La Línea no ha conseguido posicionarse del todo, ya que es territorio históricamente controlado por el Cártel de Sinaloa, y desde el cual Los Chapitos se lanzan, como hizo su padre años atrás, contra el Nuevo Cártel de Juárez.

La Línea está lejos aún de ser considerada como una organización sólida y jerárquicamente definida. Son muchos los grupos que conviven bajo ese nombre, y que responden a intereses y liderazgos diversos. De allí la complejidad del conflicto actual, pues mientras unos elementos de La Línea se enfrentan a Los Chapitos con la ayuda de los Zambada (también del Cártel de Sinaloa) y del Cártel Jalisco, otros se han aliado con los Guzmán para hacer exactamente lo opuesto. Por ello no es sorprendente que el fiscal general de Chihuahua haya declarado que los hechos de violencia de esta semana sean el resultado de una “guerra múltiple entre cárteles y sus respectivas células criminales” que ocurre en un municipio con una “presencia criminal dispersa”, y en donde las organizaciones se enfrentan “en una guerra desordenada y sin cuartel”. Aunque las instituciones de seguridad del Estado ya han comenzado a movilizarse para atender el repunte de homicidios de este año en Juárez (la SEDENA anunció la movilización de 300 elementos hacia Juárez), la estrategia de seguridad integral entre los tres niveles de gobierno tendrá que replantearse en función del nuevo actor protagónico, La Línea, que comenzará a recuperar su hegemonía, y amenazará con revivir la historia conocida y muy violenta en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua.



Obstaculiza la alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, los operativos federales en contra del CJNG

RIESGO DE SEGURIDAD

La crisis de seguridad en Michoacán se ha prolongado por la ausencia de un verdadero compromiso por parte de autoridades estatales y municipales, así como de partidos políticos, para combatir y contener la infiltración criminal en puestos de elección popular. Esta semana, por ejemplo, destaca un incidente en el que la alcaldesa de Coalcomán intervino en un operativo de la SEDENA para obligar a los militares a liberar a un presunto líder operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en su municipio. Este caso, al igual que otros previos documentados en Michoacán, obstruyen innecesariamente las labores de seguridad —detrás de cada captura, hay un importante esfuerzo gubernamental— y sus posibles efectos positivos para recuperar la paz regional.

- En este sentido, el 28 de enero, elementos de la SEDENA fueron desplegados en un operativo para detener a “El Guache”, presunto líder de extorsionadores y narcomenudistas del municipio. En este operativo, que aparentemente se efectuó en el interior de un domicilio, fue detenido “El Guache” en compañía de, aparentemente, su pareja sentimental. No obstante, por la noche, la alcaldesa de Coalcomán, María Obsulia Esquivel Colín (PRD), el síndico Rafael Saucedo Santana, el secretario del Ayuntamiento y el director de Seguridad Pública municipal encararon a los militares e impidieron que se lo llevaran detenido.
- De acuerdo con información en medios, el Ayuntamiento de Coalcomán mantiene una muy estrecha relación con los líderes locales del CJNG. Además, éste controlaría las finanzas y a la Policía Municipal, además de que recibiría una cuota como extorsión de parte del municipio.
 - En este sentido, dos intermediarios son Anabel Ávila Castrejón—exdirectora de Desarrollo Social en la administración 2018-2021— Norberto Garibay Rivera, expresidente de la Asociación de Industriales Madereros en el municipio. Se desconoce si “El Guache” es esta última persona o bien, si son diferentes.
 - Además, durante el tiempo en el que Ávila Castrejón fue directora de Desarrollo Social, supuestamente el Ayuntamiento entregó bienes a los pobladores firmados por “El Señor de los Gallos” (en alusión a Nemesio Oseguera Cervantes).

Hasta ahora, autoridades estatales han insistido en la postura de minimizar la gravedad de la infiltración o cooptación de ayuntamientos michoacanos por parte de organizaciones criminales. En este sentido, destaca que, tras la filtración del colectivo Guacamaya Leaks de presuntos alcaldes vinculados con organizaciones criminales a finales de 2022, el Gobierno estatal indicara que ésta pudo haber sido manipulada. Al ser omiso o ceder ante este tipo de intereses perversos, el Gobierno estatal ha permitido que estas relaciones continúen.

- Actualmente, se presume que la zona está controlada principalmente por miembros del CJNG. Sin embargo, también es probable que en estos municipios operen de forma permanente o intermitente, otros grupos miembros de la alianza “Cárteles Unidos”, por ejemplo, Cártel de Tepalcatepec o Los Viagra.

De acuerdo con datos de Lantia Intelligence, los municipios de Coalcomán y Chinicuila mantienen rangos bajos de actividad criminal de alto impacto —durante todo 2023, en el primero se registró una única víctima letal del crimen organizado (VLCO), mientras que, en el segundo, fueron ocho. Sin embargo, la presencia del CJNG en esta zona es relevante en términos de dinámica criminal.

- Primero, al sur de los municipios en los que opera “El Guache”, en Aquila transita la carretera Federal 200 (“La Costera”) desde el puerto de Lázaro Cárdenas con dirección a Colima (en Tecomán, hay entronques que comunican a otras importantes plazas controladas por el CJNG en Jalisco y Colima). Esta carretera es sumamente importante para

el CJNG, pues se tiene conocimiento de que el puerto de Lázaro Cárdenas es uno de los más importantes para el ingreso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas (por ejemplo, en el pasado se identificó el decomiso de N-Phenethyl-4-piperidone y 4-Anilino-N-phenethylpiperidine, precursores del fentanilo, en el puerto procedentes de China).

- Segundo, en la zona de Coahuayana, Coalcomán y Aguililla se tiene registro de empresas mineras dedicadas a la extracción de hierro y otros minerales. Aparentemente, a estas empresas se les cobra una cuota por cada kilo de material extraído.

Tras el fracaso de la captura, el Ejército difundió el aseguramiento de múltiples armas en el municipio de Coalcomán y Tumbiscatío, probablemente para enviar el mensaje de que, a pesar de las obstrucciones del Ayuntamiento, éste se mantiene presente en la zona y continuará efectuando acciones en contra del CJNG y otros grupos criminales.

En el corto a mediano plazo, es previsible que continúe la inseguridad en la zona: [1] que se identifiquen movimientos de parte de grupos criminales por las carreteras —en particular, la Federal 200—; y [2] que el CJNG continúe cobrando extorsión a comerciantes y empresarios que tienen actividades en su municipio (principalmente, a empresas mineras y productores agrícolas).



A pesar de que autoridades federales y estatales destacan disminución del robo a autotransporte, carreteras de Jalisco se mantienen en alerta ante hechos delictivos

RIESGO AL SECTOR TRANSPORTE

El pasado 7 de enero, medios de comunicación informaron sobre una balacera en la carretera libre a Zapotlanejo (tramo de la carretera 80 que inicia en Tlaquepaque) cuando policías municipales notaron la presencia de dos pipas que presuntamente transportaban combustible robado (huachicol). Elementos de la SEDENA iniciaron una persecución que culminó en el entronque a la carretera a El Salto, donde se encontró una de las unidades que quedó bajo resguardo de personal de Pemex. Ninguna autoridad brindó un informe sobre el incidente, aunque las notas periodísticas indicaron que no hubo víctimas, ni detenidos, así como tampoco hubo declaraciones sobre el paradero final de la segunda unidad.

Este incidente alertó a los habitantes, así como a los usuarios de las carreteras debido a los hechos de violencia que ocurrieron en la zona en los meses de noviembre y diciembre de 2023.

a) El 19 de noviembre, presuntos miembros de la delincuencia organizada asesinaron a tres militares en la carretera 205 en el entronque a Nochistlán en Teocaltiche y, en su afán de escapar, bloquearon el kilómetro 55 de la carretera 80, tramo San Juan de los Lagos–Jalostotitlán, y el kilómetro 30 de la carretera 215, Jalostotitlán–Teocaltiche.

b) El 25 de noviembre, luego de la detención de Juan Carlos Pizano Ornelas (a) “El CR”, presunto líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, San Gabriel y Zapotitlán, se registraron bloqueos con camiones incendiados en los kilómetros 24 y 34 de la autopista 54D Guadalajara-Colima, y en el entronque a Atemajac de Brizuela en la carretera 401 de Zapotlán el Grande-Guadalajara.

c) El 19 de diciembre, elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron agredidos por civiles armados en San José de las Flores, lo que también derivó en narcobloqueos con tres unidades incendiadas en la carretera libre 80, tramo Acatic-Tepatitlán, y un vehículo de carga en el kilómetro 24 de la autopista 80D. Cabe destacar que un día antes, la SEDENA decomisó armas a supuestos miembros del CJNG en Poncitlán.

Estos hechos y el robo a autotransporte de carga hacen que las carreteras en Jalisco sigan destacando por su peligrosidad. Incluso organizaciones y cámaras que agrupan a transportistas, así como compañías de seguros consideran que la violencia en la zona va en aumento, aun cuando los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran una tendencia a la baja desde 2020.

Por su parte, el gobierno jalisciense también declaró que en la entidad el robo a autotransporte va en decremento; sin embargo, los hechos delictivos derivados de la vigilancia en la zona por parte de la policía municipal, estatal, así como de la GN y la Sedena, como balaceras, persecuciones, quema de vehículos y narcobloqueos también representan un peligro latente para los usuarios de las vías de comunicación en el estado.

Incluso el gobierno de Estados Unidos mantuvo durante 2022 una prohibición de viaje en la carretera estatal 544, que va del municipio de Mascota a San Sebastián del Oeste (zona en la que se dice se esconde el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes (a) “El Mencho”). Aunque esta restricción se levantó en 2023; el gobierno de Estados Unidos, continuó pidiendo a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes por otras carreteras de Jalisco.

En el último trimestre de 2023, transportistas consideraron que viajar hacia el norte del país o hacia Colima era más seguro que recorrer las carreteras de Jalisco y exigieron a los tres niveles de gobierno un alto a la impunidad con la que actuaba el crimen organizado en el estado. Asimismo, resaltaron los altos costos que representan las pólizas de seguro para sus unidades y la mercancía que transportan, así como el servicio de resguardo con el que tenían que contar para realizar los traslados, lo que consecuentemente aumentaba el precio para los consumidores finales.

En ese mismo periodo, el Macrolibramiento de Guadalajara, el anillo Periférico Sur y el tramo entre San Luis Potosí y Tepatitlán de Morelos en la autopista 80D, fueron ubicados como puntos altamente peligrosos para el traslado de mercancías. Además, compañías de autotransporte destacaron los tramos de Lagos de Moreno a Villa de Arriaga, San Luis Potosí; así como el trayecto Tepatitlán-La Joya también de la 80D. Mientras que en la 15D, los puntos de peligro se ubicaron entre Ocotlán y Guadalajara, además de la autopista La Piedad-El Salto.

Los hechos delictivos tanto en la entidad como en otros estados del país, se presentan en su mayoría en carreteras estatales (66 %), pero se percibe un incremento en las carreteras federales (34%).

Jalisco sigue entre las 10 entidades con más robos a autotransporte en las cifras oficiales del SESNSP, y aunque los datos reflejen una tendencia a la baja, existen zonas de alta incidencia delictiva, por lo que se espera que en el corto plazo se sigan presentando diferentes hechos violentos. Además, el estado también ha presentado una alta incidencia en el robo de combustible y durante 2023 se presentó un alza en el delito, lo que ubicó a Jalisco en el séptimo puesto a nivel nacional.

Se espera que la violencia continúe principalmente en las vías que circundan la zona metropolitana de Guadalajara, como las carreteras libres 15 y 80, así como las autopistas 15D y 80D, especialmente en la zona del Macrolibramiento de Guadalajara, por ser los tramos donde existe una alta carga de tránsito de mercancías tanto a la capital jalisciense, así como puntos al sur y norte del país.



Ataques contra policías en Guanajuato; respuesta para exhibir fuerza por parte del Cártel Santa Rosa de Lima

DINÁMICA CRIMINAL

Los ataques y emboscadas dirigidos contra fuerzas de seguridad en Guanajuato se han intensificado en el último mes, especialmente contra los policías municipales y los policías estatales en el municipio de Celaya. En menos de 10 días se han registrado, al menos, ocho diferentes agresiones contra las fuerzas de seguridad, que han resultado en la muerte de ocho policías y seis agresores; y en el arresto de dos personas.

- El 24 de enero hubo una emboscada en la carretera Celaya-Salvatierra a la altura de la comunidad Santa María del Refugio que resultó en la muerte de cuatro policías municipales, aun no hay información sobre posibles detenidos.
- El 25 de enero hubo un enfrentamiento en la carretera Villagrán-Celaya entre policías estatales y civiles armados que derivó en la muerte de uno de los agresores y el arresto de otros dos. Los policías habían notado que los civiles estaban armados, y comenzó una persecución que terminó con intercambios de disparos. Ese mismo día fue asesinado un policía de tránsito, también en Celaya.
- El 28 de enero, en la colonia Tresguerras en Celaya, hubo otro ataque cuando policías estatales patrullaban la zona; este derivó en la muerte de cuatro personas (un policía y tres de los agresores). Ese mismo día, más tarde, lanzaron explosivos que no detonaron en instalaciones de seguridad pública del estado (un C2 en Celaya y la Comandancia Norte).
- El 31 de enero, otro policía municipal fue atacado en Celaya, en la comunidad San Juan de la Vega, además fueron heridos dos niños como resultado de la balacera.

- El primero de febrero hubo otra emboscada en Celaya, en la comunidad de Pelavacas, dirigida contra elementos de la policía municipal. Fallecieron dos policías y dos agresores, que eran colombianos.
- La comandancia de policía en Rincón de Tamayo, Celaya, fue baleada por hombres a bordo de una camioneta. Tampoco hubo detenidos.

El municipio donde se concentran estos incidentes es, claramente, Celaya. No obstante, también es importante destacar los ataques en Salvatierra y Villagrán. En estos municipios hay una fuerte disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Santa Rosa de Lima. Como advertimos hace algunas semanas, tras la detención de uno de los líderes del Cártel Santa Rosa de Lima, el hijo de José Antonio Yépez Ortiz (a) "El Marro" (fundador de la organización y líder hasta su captura en agosto del 2020), Luis Antonio Yépez Cervantes (a) "El Monedas" o "El Sonic", los intentos de esta organización por hacer que sus ataques sean cada vez más visibles y aterradores responden a un objetivo de disuadir a las fuerzas de seguridad de su estrategia concentrada en debilitar a esta organización mediante la captura de cabecillas, y por exhibir fortaleza frente al CJNG.

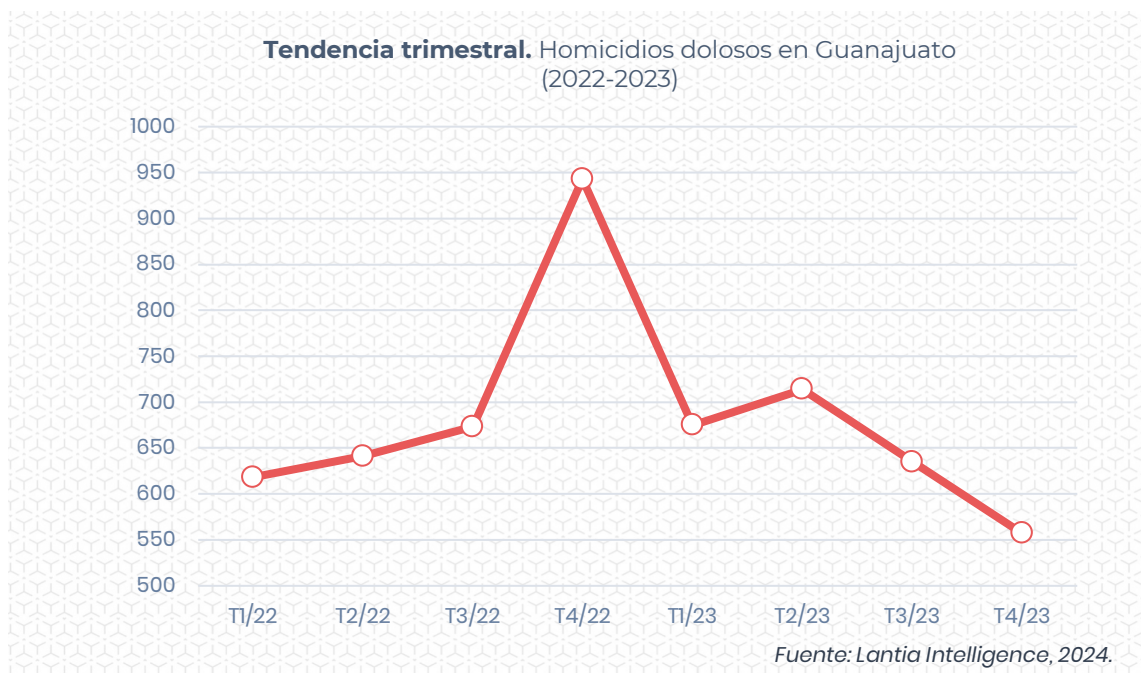
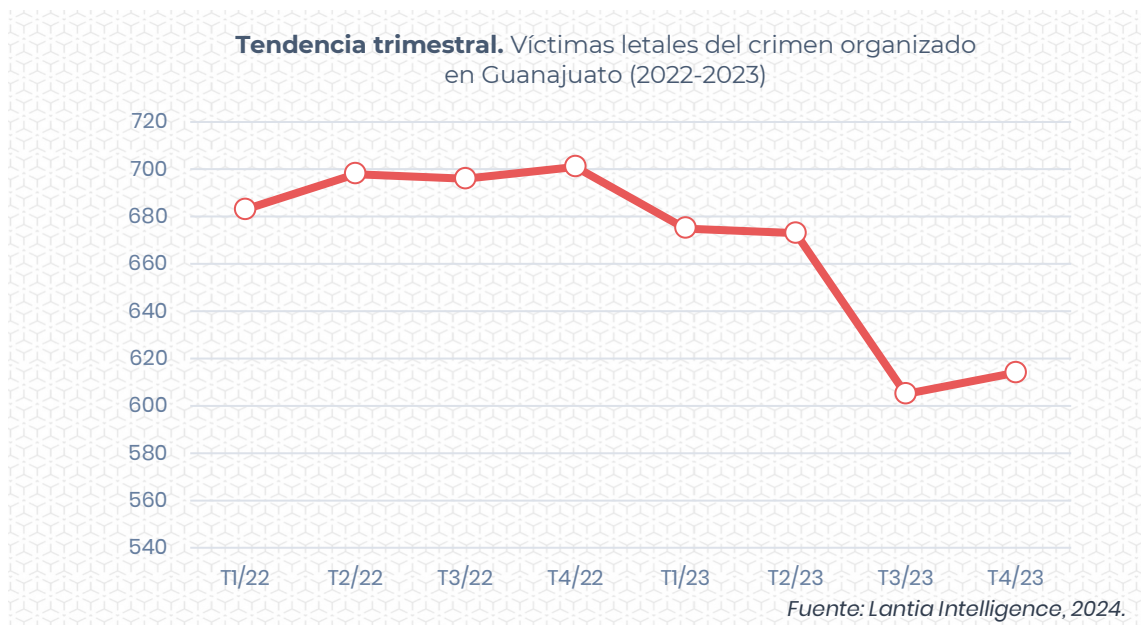
Aunque ninguna organización se ha adjudicado los ataques, es probable que se trate del Cártel Santa Rosa de Lima, que ya participó en eventos similares precisamente tras la captura de "El Monedas", en los que hubo bloqueos, incendios de vehículos y balaceras, además del asesinato de un bombero.

Además de lo mencionado, el estado vive una coyuntura delicada como resultado de otros eventos como las manifestaciones para exigir justicia frente a los hechos de violencia de finales de diciembre del año pasado, cuando fueron asesinados varios jóvenes en una posada y seis médicos; y las marchas contra las desapariciones. Sobre todo, después de que una buscadora, Lorenza Cano Flores, fuera secuestrada después de que su hijo y su esposo fueran asesinados. Aunque aun no ha sido localizada la buscadora, fueron arrestados tres presuntos participantes de estos eventos, pero fueron liberados por falta de pruebas, lo cual causó la indignación de la Fiscalía del estado.

En este contexto, el secretario de Seguridad del estado, Alvar Cabeza de Vaca, criticó la diferenciación entre delitos del fuero común y delitos federales, señalando que, en vez de existir una diferenciación en la categorización de delitos, lo cual impide que las autoridades estatales persigan los del fuero federal, como aquellos relacionados con el crimen organizado, debería eliminarse esta diferencia, y que aquellos casos de mayor importancia sean atraídos por las autoridades federales. Estas declaraciones responden a la necesidad de hacer frente a la coyuntura, además de tratarse de la siempre presente búsqueda por adquirir mayores facultades por parte de las autoridades locales.

Como apuntamos hace algunas semanas, a pesar de que sigue habiendo un alto nivel de violencia en el estado, continúa la tendencia de leve descenso de homicidios y de Víctimas Letales del Crimen Organizado. Sin embargo, aunque estos eventos recientes reflejan una afrenta a las fuerzas de seguridad y un esfuerzo por provocar miedo y exhibir fuerza, por el

momento, no parecen significar un cambio en las tendencias; aunque es importante destacar que, de continuar, sin una respuesta determinante de las autoridades, la situación podría comenzar a agravarse.





Hallazgo de restos de 15 migrantes en Tuxpan anuncia continuación de masacres en la región norte de Veracruz

DINÁMICA CRIMINAL

La noche del pasado domingo 28, autoridades locales hallaron una camioneta que llevaba restos humanos de hasta 15 personas (según medios locales) en una de las salidas de Tuxpan, Veracruz. Se trata de un grupo de migrantes (10 hombres y cinco mujeres) que fueron ejecutados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación de manera a mandar el mensaje a su grupo rival Grupo Sombra de detener su tráfico de migrantes en la región de Poza Rica. Junto a la camioneta, el grupo criminal dispuso una narcomanta en la que amenazaron a jefes de plaza del Grupo Sombra y alertaron a la población migrante de no pagar a este grupo por transporte hacia la frontera norte. No tenemos mayor información al momento, pero los jefes de plaza del CJNG nombrados son “Gavilán”, “Optimus” y “Fresa.” Cabe recordar que ambas facciones criminales mantienen una pugna por el control territorial de esta región norte de Veracruz desde 2017.

Tres días después, el Grupo Sombra respondió a este evento mediante el despliegue de hasta cuatro narcomantas en el municipio de Poza Rica, que fueron retiradas por las autoridades. En una de ellas, el grupo denominado Sombra amenazó directamente a un jefe de plaza del CJNG conocido como el Coco, vinculado con funcionarios del gobierno local. De modo que es muy probable que se registren nuevas masacres de migrantes y ataques violentos como continuación de esta disputa criminal.

- Cabe recordar que el Grupo Sombra forma parte, junto a Los Tercios, de una coalición criminal conocida como Cártel Mafia Veracruzana, formada para unir fuerzas para enfrentar al CJNG y a grupos remanentes de Los Zetas. El Grupo Sombra opera en Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí y ha establecido una peligrosa presencia, amenazando tanto a la policía como a otros delincuentes. En diciembre, el grupo buscó consolidar su arraigo social mediante la distribución de comida y ropa en comunidades de Tuxpan.

Con respecto a las autoridades, el gobernador Cuitláhuac García informó que la única línea de investigación fue un arreglo de cuentas entre organizaciones criminales. Sin embargo, las autoridades estatales no han definido, ni la identidad, ni el número oficial de personas halladas. El 31 de enero, la fiscal general del estado, Verónica Hernández declaró que hasta el momento han sido detenidas entre cinco y siete personas por la aparición de los cuerpos. A nivel federal fueron enviados 300 agentes y militares, integrantes de la “Fuerza de Tarea Oriente”, a los municipios de Tuxpan, Poza Rica y Tihuatlán. El objetivo principal es inhibir las actividades de la delincuencia organizada y permitir que la población realice sus actividades habituales con normalidad. En este contexto, es probable que se den capturas de jefes regionales de ambas facciones en las próximas semanas. Recordemos que el gobierno federal mantiene una estrategia de protección de rutas comerciales terrestres y aéreas, por

lo cual es posible que se busque restablecer la estabilidad carretera y contención del tráfico de migrantes.

Es importante reportar que Veracruz vive una crisis por aumento de masacres de este tipo. Si bien datos de *Lantia Intelligence* nos revelan una disminución progresiva de víctimas fatales del crimen organizado desde un máximo de 346 asesinados en el primer trimestre de 2018 a un mínimo de 78 en el cuarto trimestre de 2023, el fenómeno de asesinatos en bloque va en aumento. En 2023, se registraron ocho masacres que revelaron un escalamiento del uso de violencia. Advertimos que este tipo de masacres, de las cuales reportamos ocho en 2023, continuarán en el mediano plazo a manera de ajustes de cuentas entre ambas facciones criminales por control territorial. Esta violencia afectará a transportistas que emplean las carreteras de la zona norte para arribar a Tamaulipas, zona controlada por el Cártel del Noreste.

- A manera de ejemplo, recordemos el caso de Poza Rica, donde se encontraron cadáveres almacenados en hieleros en agosto de 2023. En este caso, la dinámica criminal fue un conflicto interno del CJNG: una disputa entre una facción del CJNG que colabora con algunas agrupaciones remanentes de los Zetas (Grupo Sombra, Gente de la Sierra, Los Pelones) con el propósito de expulsar a otra facción del CJNG liderada por un sujeto apodado "El Coco", al parecer vinculado con funcionarios del gobierno local. De modo que advertimos que la masacre de esta semana reveló una continuación entre agrupaciones criminales que buscan defenderse de la expansión criminal del CJNG.
- En noviembre de 2023, cerca del municipio de Juchique de Ferrer, Veracruz, se localizaron cinco cuerpos, incluyendo el de una mujer, con evidentes signos de tortura. Los cuerpos fueron encontrados en un camino vecinal, en una desviación hacia la Laguna de Farfán. Según las investigaciones, las víctimas probablemente fueron asesinadas en un lugar diferente y luego sus cuerpos fueron depositados en el lugar del hallazgo.

En Ciudad Mendoza, Veracruz, el 8 de enero de 2024 se registró la desaparición de cuatro personas, incluido Antonio Sánchez, presuntamente relacionado con el líder criminal Roberto de los Santos de Jesús "El Bukanas." Sánchez fue inicialmente detenido por elementos de tránsito municipal y luego desapareció en compañía de otras tres personas. Tras esta serie de eventos, se informó del asesinato de un agente de tránsito. Las autoridades sospechan que los oficiales de tránsito municipal podrían estar implicados en la desaparición como represalia por el asesinato del agente y posiblemente estén operando para un grupo criminal rival a "El Bukanas". Aunque el gobernador Cuitláhuac García no ha confirmado las actividades ilegales de Antonio Sánchez, la investigación sigue en curso e incluye la detención de Fausto "N", director de Tránsito del municipio Camerino Z. Mendoza, por delitos contra las instituciones de seguridad pública. De modo que advertimos de una vinculación mayor del crimen organizado en varios puntos con cuerpos policiales, razón por la

cual estimamos que es posible que la SEDENA y Guardia Nacional sean implicadas en el aseguramiento de la elección de 2024.



Solo el 11% de la capacidad penitenciaria federal se encuentra ocupada. En ocho entidades se observa una sobrepoblación penitenciaria: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, y Sonora

ANÁLISIS LANTIA INTELLIGENCE

Lantia Intelligence presenta un análisis de la ocupación instalada en centros de internamiento para las personas privadas de la libertad. Dichos espacios incluyen a los centros penitenciarios (federales y estatales) y a los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes. Las cifras analizadas provienen del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 publicado por el INEGI. Los principales hallazgos indican lo siguiente:

- En total se contabilizaron 222,133 espacios, de los cuales el 97% corresponden a centros penitenciarios y el 3% a centros para adolescentes.
- Se reportó una ocupación del 62%; de forma específica, los centros penitenciarios tienen una ocupación del 64% (se encuentran internados 136,962, la capacidad es de 215,275 espacios), mientras que los centros de adolescentes están ocupados en un 22% (se encuentran internados 1,534, la capacidad es de 6,858 espacios).
- Destaca que los centros penitenciarios a cargo de la federación tienen una población internada de 3,035 de una capacidad de 28,520, lo que implica una ocupación de apenas el 11%. También resaltan los siguientes estados, los cuales tienen ocupada máximo una tercera parte de su capacidad penitenciaria (para adultos) instalada: Baja California Sur (20%), Campeche (29%), Colima (34%), CDMX (33%), Guerrero (29%), Jalisco (32%), Oaxaca (21%), Sinaloa (24%), y Tamaulipas (12%). Por otra parte, son ocho estados los que han sobrepasado por completo su capacidad instalada: Aguascalientes (188%), Baja California (134%), Coahuila (320%), Chihuahua (123%), Durango (108%), Guanajuato (138%), Nayarit (317%), y Sonora (117%).
- En cuanto a la ocupación de centros especializados en adolescentes, son tres estados con una ocupación superior al 50%: Aguascalientes (54%), Guerrero (50%), y Nayarit (65%). Por otro lado, son ocho estados con una ocupación máxima del 10%: Baja California Sur (1%), Campeche (1%), Jalisco (9%), Oaxaca (8%), Sinaloa (4%), Tamaulipas (5%), Tlaxcala (2%), y Veracruz (7%).
- En 2022 se registraron un total de 2,456 incidentes, de los cuales el 807 fueron riñas (es decir, uno de cada tres incidentes en los centros penitenciarios se trata de una riña), 15 incidentes de fuga o evasión, 33 intentos de fuga o evasión, 15 motines, 17 manifestaciones de inconformidades (huelga de hambre, quema de ropa o colchones, etc.), tres daños a la infraestructura penitenciaria, y 1,566 incidentes sin especificación. En di-

chos incidentes fallecieron 292 personas (todos eran internos), además de que resultaron heridos o lesionados 562 personas (el 99% de éstos eran internos).

Ocupación de la capacidad instalada en centros de internamiento en 2022

Estado	Centros penitenciarios			Centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes		
	Personas internadas	Capacidad instalada	% Ocupación	Personas internadas	Capacidad instalada	% Ocupación
Federal	3,035	28,520	11%	NA	NA	NA
Aguascalientes	3,502	1,866	188%	58	108	54%
Baja California	19,534	14,584	134%	130	570	23%
Baja California Sur	357	1,819	20%	1	94	1%
Campeche	516	1,782	29%	1	72	1%
Coahuila	9,663	3,024	320%	21	84	25%
Colima	1,177	3,503	34%	15	111	14%
Chiapas	2,644	4,843	55%	40	168	24%
Chihuahua	9,896	8,044	123%	117	478	24%
CDMX	8,962	27,549	33%	168	547	31%
Durango	2,484	2,295	108%	30	279	11%
Guanajuato	8,273	5,992	138%	59	295	20%
Guerrero	1,070	3,730	29%	62	124	50%
Hidalgo	2,554	4,785	53%	17	80	21%
Jalisco	4,611	14,213	32%	42	469	9%
México	13,488	13,866	97%	224	500	45%
Michoacán	2,830	5,424	52%	31	229	14%
Morelos	1,207	2,583	47%	50	144	35%
Nayarit	3,754	1,186	317%	40	62	65%
Nuevo León	7,459	9,053	82%	29	100	29%
Oaxaca	870	4,238	21%	11	130	8%
Puebla	2,410	3,942	61%	20	60	33%
Querétaro	2,841	3,463	82%	11	89	12%
Quintana Roo	1,835	2,320	79%	30	120	25%
San Luis Potosí	1,454	3,474	42%	15	120	13%
Sinaloa	1,603	6,732	24%	8	220	4%

Ocupación de la capacidad instalada en centros de internamiento en 2022

Estado	Centros penitenciarios			Centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes		
	Personas internadas	Capacidad instalada	% Ocupación	Personas internadas	Capacidad instalada	% Ocupación
Sonora	9,356	7,988	117%	164	501	33%
Tabasco	2,010	3,652	55%	18	119	15%
Tamaulipas	794	6,822	12%	14	265	5%
Tlaxcala	542	1,091	50%	2	90	2%
Veracruz	2,961	7,583	39%	16	240	7%
Yucatán	1,059	2,949	36%	27	245	11%
Zacatecas	2,211	2,360	94%	63	145	43%
Total	136,962	215,275	64%	1,534	6,858	22%

Fuente: Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales, INEGI, 2023.

Incidentes en centros penitenciarios en 2022

Estado	Fuga o evasión de personas privadas de la libertad	Intento de fuga o evasión de personas privadas de la libertad	Motines	Riñas	Manifestación de inconformidades (huelga de hambre, quema de ropa o colchones, etc.)	Daños a la infraestructura penitenciaria	Otro	Total Incidentes	Personas fallecidas	Personas lesionadas
Federal	0	0	1	378	0	0	572	951	42	242
Aguascalientes	0	0	0	1	0	0	0	1	NA	1
Baja California	0	2	0	46	0	0	88	136	NA	16
Baja California Sur	0	1	0	19	0	1	0	21	NA	NA
Campeche	0	0	0	10	0	2	13	25	1	7
Coahuila	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Colima	0	0	0	12	0	0	12	24	10	37
Chiapas	0	17	1	6	11	0	7	42	2	6
Chihuahua	0	1	0	2	0	0	367	370	11	47
CDMX	0	0	0	12	1	0	0	13	NA	13

Incidentes en centros penitenciarios en 2022

Estado	Fuga o evasión de personas privadas de la libertad	Intento de fuga o evasión de personas privadas de la libertad	Motines	Riñas	Manifestación de inconformidades (huelga de hambre, quemado de ropa o colchones, etc.)	Daños a la infraestructura penitenciaria	Otro	Total Incidentes	Personas fallecidas	Personas lesionadas
Durango	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Guanajuato	0	0	0	0	0	0	12	12	NA	NA
Guerrero	3	1	2	5	0	0	0	11	NA	13
Hidalgo	0	1	0	6	0	0	1	8	NA	14
Jalisco	0	5	0	23	0	0	18	46	NA	NA
México	1	0	0	74	0	0	341	416	183	116
Michoacán	0	0	0	21	0	0	105	126	24	NA
Morelos	0	0	0	4	0	0	0	4	2	NA
Nayarit	0	0	0	1	0	0	0	1	NA	1
Nuevo León	0	0	1	140	1	0	8	150	NA	35
Oaxaca	0	1	10	14	1	0	0	26	NA	2
Puebla	0	1	0	1	1	0	0	3	NA	NA
Querétaro	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Quintana Roo	0	0	0	6	0	0	0	6	1	NA
San Luis Potosí	0	0	0	1	0	0	0	1	NA	1
Sinaloa	1	0	0	3	0	0	9	13	9	3
Sonora	1	1	0	3	1	0	0	6	NA	3
Tabasco	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tamaulipas	0	1	0	3	0	0	0	4	5	NA
Tlaxcala	0	0	0	1	0	0	0	1	NA	1
Veracruz	0	0	0	1	0	0	13	14	NA	NA
Yucatán	0	0	0	5	0	0	0	5	NA	2
Zacatecas	9	1	0	9	1	0	0	20	2	2
Total	15	33	15	807	17	3	1,566	2,456	292	562

Fuente: Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales, INEGI, 2023.